

Así el C. juez de Distrito, primer suplente de este juzgado, lo decretó, mando y firmó por ante mí. Doy fé.—*Antonio Rincon.*—*Luis G. Medina.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo, comenzado ante el juez de primera instancia de Celaya, y proseguido ante el de Distrito de Guanajuato por Gabriel Hernandez y Felipe Fuentes, contra el gefe político de Celaya, que los condenó á muerte por ladrones y dispuso llevar á efecto esa pena, no obstante estar pendiente de resolución la solicitud de indulto de los quejosos.

Considerando: que si la ley de 13 de Abril de 1869, segun la que se juzgó á los quejosos, suspendió respecto de los plagiarios y de los ladrones en despoblado, en otras garantías, las á que se refiere el art. 20 de la Constitución federal, no les privó del derecho de defensa: que por lo mismo, esa ley no quitó el recurso de indulto que es una defensa: que antes bien las circulares de 9 de Agosto y 15 de Setiembre, así como la ley de 20 de Noviembre de aquel año, conceden á los plagiarios y ladrones en despoblado la facultad de solicitar indulto, la que nada importaría si los solicitantes fuesen ejecutados antes de resolverse sobre su solicitud: que la dilacion en conceder ó negar el indulto no es un motivo para ejecutar la pena de que esto se pide; pues la solicitud relativa debe resolverse por la autoridad competente del Estado: que disponer la aplicación de una pena de que se ha solicitado indulto antes de que se resuelva sobre la solicitud, es atacar la garantía de la defensa concedida á todo acusado, y por lo mismo importa violación del art. 20 de la Constitución federal; se decreta: que se confirma la sen-

tencia pronunciada el 25 de Setiembre próximo pasado, por el juez de Distrito de Guanajuato, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege á los citados Felipe Fuentes y Gabriel Hernandez, contra la providencia por la que el C. gefe político de Celaya dispuso que aquellos fueran ejecutados, no obstante haberse acogido al recurso de indulto declarado por la circular de 15 de Setiembre de 1869.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan, por las menores Petrona y Magdalena Conoh y Manuela May, contra los procedimientos de la gefatura política de Mérida, por violación de garantías.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Manifiesta en su adjunto informe el C. gefe político, que cuando el 12 del presente mes tuvo noticia de que las menores Pe-

trona y Magdalena Conoh y Manuela May, además de haberse fugado habían también robado, las consignó al C. juez 1º del crimen de esta ciudad, porque se retardaba la contestación del jefe político de Izamal á cuya disposición había puesto á las quejasas, que no era posible estuviesen detenidas mas tiempo en el hospital. Como se vé por la propia confesión de la autoridad contra quien se reclama el acto que motiva este juicio, no solo no obsequió la providencia de vd. en que mandaba suspenderlo inmediatamente, sino que desatendiendo el requerimiento que dirigió vd. á este fin al gobernador del Estado, quien con fecha 12 de este mismo mes asegura haberle trascrito la respectiva comunicacion de vd. tuvo por conveniente, para no prolongar la prision de las prófugas, consignarlas al juez del crimen para que las juzgase por el delito de hurto, que despues supo habían cometido al fugarse. Llamo desde luego la atencion, C. juez, que para hacer la requisición de esas tres pobres huérfanas solo se hubiese alegado que eran prófugas de la casa de su amo y curador, y que mas tarde, por otro conducto que no nos revela el C. jefe político de esta capital, se haya objetado que también eran ladrones, aunque sin decirse qué cosa se guardaron al verificar su escapatoria. Parece pues, que se tuvo presente lo accesorio y se olvidó lo principal cuando fueron requeridas; pero lo que el buen sentido inclina á presumir, es: que no pudiendo sostenerse como causa justa de prision y ni siquiera de detencion la simple fuga de aquellas menores, se les culpó á última hora de hurto, para que con este motivo, que en concepto del fiscal es un pretesto, quedase sin cumplimiento el auto en que decretó vd. se suspendiera la detencion de las quejasas, y se hiciera indefinida, bajo los auspicios de una causa criminal, la prision que, despues de tres dias de haberla estado sufriendo con el nombre de detencion las quejasas, conocia el C. jefe político de esta capital que no

era posible que se les prolongase mas tiempo. En verdad que es ingenioso este medio inventado para contrarestar con buen éxito los juicios de amparo. Pero á pesar de él, se deja en pié la prueba de que Manuela May y las hermanas Conoh, han estado presas por mas de tres dias, sin auto que justifique su prision, pues cuando el dia 13 del corriente las consignó el jefe político de esta capital al juez 1º del crimen, no proveyó este dicho auto, puesto que el 16 todavía se andaba en comunicaciones entre el mismo jefe político y el de Izamal, anunciando este que había pasado ya al juez de primera instancia de aquella localidad el conocimiento del negocio. Como quiera que sea, el evidente resultado de todo es que, Manuela May, Petrona y Magdalena Conoh, han estado presas, de orden del C. jefe político de esta capital por mas de tres dias sin auto motivado de prision; y resultando violadas en sus personas las garantías que otorga el art. 19 de la Constitución, el fiscal, con fundamento de él y del 1º fracción 1ª de la ley suprema de 20 de Enero de 1869, pide á vd. se sirva concederles, en nombre de la justicia nacional, el amparo que demandan contra el mencionado acto vejatorio.

Mérida, Agosto veintiseis de mil ochocientos setenta y uno. (Firmados.)—*P. Hijuelos.*

#### *Sentencia del Juzgado de Distrito.*

Juzgado de Distrito de Yucatan.

Mérida, Setiembre once de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por las menores Petrona y Magdalena Conoh y Manuela May, contra el C. jefe político de esta capital, por haberlas puesto presas sin auto motivado de prision, ni ser autoridad competente para ello, á efecto de obligarlas á permanecer prestando servicios personales al C. Luis Carrillo sin la

justa retribucion de su trabajo y sin su pleno consentimiento. Visto el auto de suspension del acto reclamado; las constancias en que aparece no haberlo cumplimentado el C. gefe político; el dictámen del C. promotor fiscal; la citacion para sentencia, y

Considerando: que de autos consta que las querellantes estuvieron presas en el hospital general de esta ciudad de órden del gefe político: que no aparece que hayan sido requisitadas por ninguna autoridad como prófugas ó delinquentes, en cuyo caso no mas hubiera podido asegurarlas la autoridad política, conforme á sus atribuciones: que lo que consta por confesion del C. gefe político es, que él las puso primero á disposicion de la misma autoridad política del partido de Izamal y despues á la del juez 1º de lo criminal de esta ciudad, quien se dice que las remitió al C. Luis Carrillo: que no hay duda que la gefatura política, al reducir á prision á las querellantes, del 8 al 13 de Agosto del corriente año, sin requisitoria y sin auto motivado de prision que no podia dictar, las ha obligado á seguir prestando servicios personales, sin su consentimiento y sin la retribucion de su trabajo personal.

Por lo expuesto, y con arreglo á los artículos 5º, 16 y 19 de la Constitucion federal, de conformidad con el parecer fiscal, la autoridad, en nombre de los supremos poderes de la Union, decreta:

Primero; Se ampara y protege á las quejas contra los actos del C. gefe político de esta capital, por haberlas tenido presas por mas de tres dias sin auto motivado, para obligarlas á prestar servicios personales sin su consentimiento y sin la justa retribucion de ellos.

Segundo; Sáquese testimonio de este fallo para su publicacion, y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con los artículos 13 y 27 de la suprema ley de 20 de Enero de 1869. Notifíquese. *I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México Octubre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Mérida por Petrona y Magdalena Conoh y Manuela May, contra las procedimientos de la gefatura política de esa ciudad en virtud de los cuales fueron reducidas á prision sin consignárseles á la autoridad competente, y por mas tiempo del señalado en el artículo 16 de la Constitucion general de la República, alegando las quejas que dichos procedimientos importaban una violacion espresa del artículo citado: Vistas las constancias de autos y.

Considerando: que la gefatura política de Mérida al proceder al seguramiento de las quejas, y mantenerlas en prision por mas del tiempo señalado por la Constitucion, ha violado espresamente las garantías consignadas en el artículo citado por las peticionarias en su escrito de demanda; que estas tienen sus derechos á salvo para hacerlos valer contra la gefatura en un juicio de responsabilidad, y que en el presente caso es de atenderse á la situacion que guardan las peticionarias, se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Mérida, cuya parte resolutive manda, en nombre de los poderes de la Union amparar y proteger á las quejas contra los actos de la gefatura política de Mérida, que han motivado el presente recurso.

Segundo: diríjase exitativa por el juez de Distrito al juez competente, para que proceda á lo que haya lugar sobre la responsabilidad del gefe político de Mérida por la prision indebida de las quejas.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron,—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Toluca por los reos José Casto Gutierrez, José M. Lozano y Amado Nava, condenados á muerte como ladrones y plagiarios por el C. jefe político de Lerma, alegando que con los procedimientos del C. jefe político se violan las garantías consignadas en el artículo 2º fracción 5ª de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que ha visto el ocurso presentado por el C. Pomposo Ortega á nombre de los reos José Casto Gutierrez, Amado Nava y José Lozano, solicitando el amparo de garantías contra la sentencia de muerte que el C. jefe político de Lerma pronunció en contra de los expresados reos por los delitos de asalto, robo y plagio, en la sumaria que practicó de conformidad con la ley de 18 de Mayo último.

Ha visto tambien en el informe justificado, producido por la misma autoridad política de Lerma, negando que en su procedimiento haya violado garantía alguna de las que otorga la Constitucion federal.

El hecho que ha motivado la interposi-

ción del recurso de amparo, segun las constancias de los autos, se reduce á que, el día dos de Julio proximo pasado, á las once de la noche, fué asaltada y robada la casa de D<sup>a</sup> Josefa Fragoso, situada en la venta de Trejo en la municipalidad de Huisquilucan del Distrito de Lerma. La cuadrilla de ladrones se componia de seis hombres de á pié y de á caballo, entre los cuales iban los referidos Gutierrez, Nava y Lozano. Forzaron una ventana de la casa para poder penetrar á ella, y se robaron algunos objetos de ropa, un sombrero, un baquerillo y un caballo de la propiedad del C. Gabriel Medina.

Al retirarse los ladrones de la casa se llevaron consigo al citado Gabriel Medina, vendándolo y conduciéndolo para el interior del monte, en el que caminaron toda la noche hasta el día siguiente que logró escapárseles por causa de que se durmieron sin custodiarlo.

Es de advertir, que el espresado Medina se hallaba, la noche que asaltaron la casa de la Fragoso de tránsito en ella; y que la suma que los plagiarios le exigian por su rescate, era la de cuatro mil pesos, estrechándolo á que escribiera á su familia para que los entregaran.

Despues de una dilatada averiguacion que practicó el C. jefe político de Lerma, con fecha siete de Julio último, y con fundamento del artículo 23 de la Constitucion de la República, y artículos 2º y 3º de la ley de 18 de Mayo próximo pasado, condenó á Jose Casto Gutierrez y á José M. Lozano á la pena de muerte; y con fecha nueve de Agosto último, y por los propios fundamentos, condenó á la misma pena á Amado Nava.

El que responde, ha comprendido de la lectura del escrito de queja, que el apoyo de ella, se refiere á que la autoridad política de Lerma, en su procedimiento, se separó de los principios del derecho comun, pues en concepto de los quejosos, ni el delito ni los delinquentes aparecen bien justifi-